



Mesa 2: Políticas públicas y su impacto en la configuración de municipios y organizaciones sociales. (Siglos XX-XXI)

Carlos Cowan Ros

Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires

cowanros@agro.uba.ar

Matías Berger

Investigador del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET

mberger@ceil-conicet.gov.ar

“Sujetos” a la Organización.

Prácticas y Formatos como Objeto de Disputa en el Campo del Desarrollo Rural¹

Resumen

La promoción de la organización de los sujetos rurales subalternos es un componente omnipresente en las teorías y estrategias de desarrollo rural de los miembros de instituciones estatales y privadas del país. En el artículo se analizan las prácticas organizativas y políticas que resultan del encuentro de las representaciones y lógicas de sujetos rurales subalternos con las promovidas por agentes de desarrollo, en el marco de proyectos de intervención ejecutados entre las décadas de 1990 y de 2000. Con un enfoque etnográfico y la estrategia de estudio de caso se analizan dos tramas organizativas, una situada en la provincia de Jujuy y la otra en Formosa. Con una perspectiva comparativa se identifican regularidades y particularidades y se realizan aportes metodológicos para el estudio de procesos organizativos. Entre las conclusiones destaca que los formatos asociativos promocionados

¹Para la elaboración de este artículo se contó con el apoyo institucional y financiero del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Proyecto PICT 2014 – 2676) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (PIP 112-20150100247CO).



por los agentes de desarrollo, lejos de articular sujetos desorganizados, se proyectan sobre estructuras preexistentes y las reconfiguran como efecto del encuentro de lógicas organizativas y de disputas sobre representaciones, perfiles y formatos organizativos.

Palabras Claves: Tramas organizativas, Desarrollo Rural, Mediación Social, Prácticas Políticas.

Introducción

La “promoción de la organización”² de los *sujetos rurales subalternos*³ constituye un componente omnipresente en las estrategias de desarrollo rural implementadas por instituciones estatales y no estatales (de apoyo, religiosas y de productores) de Latinoamérica, configurando un axioma de sus prácticas y teorías de desarrollo. Si bien las representaciones, formatos y fines organizativos que impulsan son heterogéneos, se observan puntos de convergencia en algunas premisas que orientan su accionar. La intención de “organizar” suele llevar implícito el presupuesto del ‘estado de desorganización’ de los destinatarios de sus acciones o que sus lógicas de articulación son insuficientes u obstaculizan su promoción social, dadas sus características “clientelares”, “asistenciales” y/o “autoritarias”. De ahí, deriva su necesidad de implantar nuevos formatos y lógicas organizativas que consideran “democráticas”, “participativas” y “representativas”. Sin embargo, rara vez los pobladores rurales responden uniformemente a esas expectativas. Su dispar adhesión y las formas alternativas de involucramiento suele desconcertar a los agentes de desarrollo.

En los estudios sobre desarrollo rural el análisis de procesos organizativos asociados a proyectos de intervención es de creciente interés. La identificación y caracterización de “experiencias exitosas” constituye una meta que encauza gran parte de las iniciativas, muchas de las cuales se centran en identificar factores intervinientes y derivar recomendaciones. Esa forma de construir los objetos de estudio, al estar condicionada por enfoques normativos, restringe el poder explicativo del fenómeno en cuestión y suele conducir a explicaciones acuñadas en valoraciones actitudinales

² Las comillas dobles (“...”) referencian términos nativos, las comillas simples (‘...’) expresiones propias que buscan ilustrar percepciones y las *itálicas* conceptos académicos.

³ *Sujetos rurales subalternos* refiere a personas que por su baja dotación de recursos y por ocupar históricamente posiciones sociales subordinadas ven restringidas sus posibilidades de reproducción social. En los programas de desarrollo rural suelen ser denominados como “pobres”, “campesinos”, “pequeños productores”, “indígenas”, “agricultores familiares” y/o “trabajadores agrarios”.



(“individualistas-solidarios”, “democráticos-autoritarios”, “conscientes-alienados”, etc), siempre construidas desde una posición de externalidad.

Otro sesgo analítico recurrente consiste en reificar las organizaciones por medio de atribuirles propiedades de pensamiento y comportamiento humanas y concebirlas como un cuerpo homogéneo y unificado. Un atajo a ese equívoco epistemológico ocurre cuando se pretende explicar la complejidad de los procesos organizativos a partir de los testimonios de sus portavoces –dirigentes y, no en pocas situaciones, técnicos-, desconsiderando las voces y prácticas heterodoxas. Se incurre en el fetichismo observado por Pierre Bourdieu (2000), al confundir lo que el fenómeno organizativo es con la imagen oficial del mismo. Así, se observa que en la academia la “promoción de la organización” también puede operar como axioma y condicionar la forma como los sujetos sociales son pensados – ‘individuos que precisan ser organizados y conducidos para su desarrollo social’ – y, en consecuencia, restringir la comprensión de los procesos organizativos.

Interpretar la complejidad inherente a las prácticas organizativas que se despliegan en el marco de proyectos de desarrollo constituye un desafío que interpela tanto a científicos sociales como a agentes de intervención y que se asume en este artículo. Se analizan las prácticas organizativas y políticas que resultan del encuentro de las lógicas y representaciones de sujetos rurales subalternos con las promovidas por agentes de desarrollo rural, en el marco de proyectos de intervención ejecutados entre las décadas de 1990 y 2000.

Para su comprensión se desnaturaliza el imperativo de “organizar”, para pasar a identificar y analizar relacionadamente las representaciones, motivaciones y lógicas de comportamiento que despliegan los agentes de desarrollo y sus destinatarios. Se asume que todo grupo social posee sus formas particulares de vinculación y ordenamiento y, en consecuencia, las prácticas que se intentan promover interaccionarán armónica o conflictivamente con las lógicas organizativas preexistentes. Conforme observa Norman Long (2007), los procesos de intervención operan como campos de disputa y negociación en los que convergen actores con visiones de mundo, valores, lógicas cognitivas y motivaciones heterogéneas.

La unidad de análisis la conforman dos tramas organizativas, una situada en Jujuy y otra en Formosa, provincias localizadas en el noroeste y noreste argentino respectivamente. Ambos casos



están asociados a la desarticulación de las estrategias de reproducción social de los pobladores rurales como efecto de las políticas neoliberales y a la intervención de instituciones públicas y privadas de promoción social.

Al poner en relación las interpretaciones de ambas tramas organizativas, interesa identificar regularidades y particularidades a fin de profundizar la comprensión sobre procesos organizativos que operan en el espacio rural y aportar a la construcción de una perspectiva analítica para futuras investigaciones. Para ello, se analizan comparativamente las experiencias a partir de tres ejes de indagación: cuáles formatos y trayectorias organizativas emergieron del encuentro de las prácticas de vinculación de los pobladores locales y las patrocinadas por agentes de desarrollo, cómo fueron redefinidas las lógicas de vinculación de los pobladores rurales con la institucionalidad pública y qué interacciones se observan entre este proceso organizativo y la escena política local.

Ambas tramas organizativas fueron estudiadas en investigaciones independientes, que articularon el método etnográfico con la estrategia de estudio de caso. La selección se funda en sus características intrínsecas, en la factibilidad de someter los modelos interpretativos a un análisis comparativo y por ser representativas de otros procesos organizativos del país. En las dos secciones siguientes se analizan por separado los casos de estudio, en la tercera, se identifican sus regularidades y particularidades. En la última se profundiza la reflexión sobre los modos como opera el encuentro de lógicas organizativas y la potencialidad de algunos recursos analíticos para su comprensión.

1. Lo foráneo y lo autóctono en la reconfiguración organizativa en las Tierras Altas Jujeñas

La trama organizacional se despliega en las Tierras Altas jujeñas, territorio comprendido por las regiones de Puna y de Quebrada de Humahuaca. Los registros empíricos fueron colectados entre 1997 y 2014, a través de diferentes estudios sobre prácticas de intervención, organizativas, políticas y étnicas desplegadas en el territorio.

1.1 Crisis de subsistencia, ONGs y producción de grupos de beneficiarios y comunitarios



Las prácticas tradicionales de vinculación y organización de los pobladores rurales del territorio se expresan a través de redes sociales (parentesco, vecinales, políticas y religiosas) parcialmente superpuestas. Según el grado de institucionalización, estas redes pueden adquirir mayor o menor objetividad y cristalizarse grupos en ellas (“familia”, “comunidad”, “línea política”, “grupo religioso”, etc.). La participación simultánea de las personas en diferentes redes genera una alta densidad de *relaciones múltiples* (Gluckman, 1975), por las cuales se vinculan y reconocen a través de más de un papel social. Un modelo de esa estructura social postula que el grupo doméstico o “familia” es una unidad fundamental de organización de los individuos. Varios grupos domésticos configuran una aldea o “comunidad” y varias de éstas, junto a un poblado, un municipio. A su vez, cada una de estas entidades está atravesada por otras redes y/o grupos sociales que las unen o fisionan según el contexto. Sobre la producción de cada uno de estos grupos y redes, a partir de cooperaciones y disputas, se configura y dinamiza la sociabilidad local.

A lo largo del Siglo XX, las estrategias económicas de las familias rurales combinaron ingresos provenientes de la venta de mano de obra temporaria y/o permanente y de la producción agropecuaria, destinada eminentemente al autoconsumo. Dado ese modo de sustentación y su origen étnico, fueron interpretados como *campesinos semi-proletarios* de origen indígena⁴ (Madrazo, 1982; Rutledge, 1987; entre otros). A fines del siglo pasado, como efecto de la mecanización en el agro y de la retracción de la economía nacional se redujeron drásticamente sus posibilidades de empleo y se incrementó su dependencia de la producción agropecuaria, que raramente garantizaba la subsistencia del grupo doméstico. Las estrategias de reproducción social de los puneños y quebradeños se desarticulaban y entraron en crisis.

A mediados de la década de 1980 se iniciaron las primeras intervenciones en desarrollo rural en el territorio y se intensificaron en la década siguiente. Fueron realizadas por cinco ONGs nacionales y una agencia gubernamental internacional⁵. Dada la continuidad e impacto de sus acciones sobre la

⁴Las identidades indígenas o las relativas a los grupos étnicos del territorio (*coyas, atacamas, quechuas, omaguacas, oclayas y tilián*) no son asumidas de manera espontánea por gran parte de los pobladores. Siglos de colonización y discriminación les imprimieron una carga estigmatizante, que comenzó a revertirse en la última década del Siglo XX.

⁵El accionar de agencias estatales nacionales y provinciales de desarrollo rural fue de escasa relevancia hasta la segunda mitad de la década de 2000.



trama organizativa de estudio, se analizarán: i) Pastoral para el Desarrollo (PD), institución eclesial creada en 1983; ii) MINK'A, entidad laica creada en 1995 y iii) TIERRA, cooperativa de trabajo creada en 1988 por un dirigente político local para promover microemprendimientos artesanales⁶. A diferencia de esta última, los miembros de las dos primeras ONGs eran técnicos y religiosos de otras regiones del país.

Ante la crisis de subsistencia de los pobladores rurales, las estrategias de intervención de los agentes de desarrollo combinaron la asistencia técnica y financiera con la promoción de la organización en el marco de proyectos agropecuarios, artesanales, comerciales, alimentarios y/o de infraestructura comunitaria.

Los agentes de desarrollo compartían la idea de superar la asistencia individual y/o familiar y definieron al “grupo de familias” (o de productores) como al destinatario de sus proyectos. Cada grupo solía estar integrado por algunos miembros de una comunidad. A través de ellos se apostaba a potenciar relaciones de cooperación y solidaridad con vistas a enfrentar la crisis que transitaban. Conforme se consolidaban los grupos impulsaron experiencias asociativas entre éstos para mejorar sus condiciones de comercialización. En torno a la intervención de estas instituciones proliferaron grupos de beneficiarios asociados a proyectos de desarrollo y se configuró una nueva red social en el territorio.

El formato “grupo de beneficiarios” emergió y se proyectó sobre las redes de vinculación preexistentes. Los grupos impulsados por la PD, al movilizar cuestiones alimenticias, productivas y religiosas, se superpusieron con redes familiares, vecinales y católicas. Los miembros de Tierra, en la formación y asistencia a nuevos grupos de artesanos, tendieron a convocar personas de su red de pertenencia y simpatizantes de su línea política. Los técnicos de MINK'A, menos involucrados en la trama social local, proyectaron sus acciones en la “comunidad”, apostando a agregar al conjunto de vecinos. La movilización y el comportamiento corporativo de los miembros de cada “comunidad” estuvo en el horizonte de las tres instituciones. En los hechos, la red de vínculos efectivamente movilizada solía corresponderse con el grupo de pertenencia (o *facción*) del referente comunitario en quién delegaban la convocatoria.

⁶En este caso de estudio, las instituciones y organizaciones no estatales son denominadas con nombres ficticios.



Un aspecto a considerar es que la creación y participación en los grupos patrocinados por técnicos de las ONGs, lejos de formar parte de una iniciativa o necesidad de los pobladores rurales, constituía un requisito impuesto por los primeros para constituir a los segundos en beneficiarios de sus proyectos. Los pobladores rurales, frente a la coyuntura apremiante que transitaban, demandaban “ayuda”, refiriéndose con ésta principalmente al acceso a recursos económicos. La diversidad de problemáticas identificadas por los técnicos en sus diagnósticos (“inequidad de género”, “clientelismo político”, etc.), como sus propuestas de solución no siempre tenían sentido para sus destinatarios. La confluencia de agentes de desarrollo y campesinos en proyectos locales se configuraba sobre un principio de (des)entendimiento y una relación de poder asimétrica.

Entre los campesinos emergieron representaciones y vivencias heterogéneas en torno a los nuevos formatos organizativos. Para muchos, la asociación en grupos de beneficiarios, es decir entre parientes y vecinos, formaba parte de sus prácticas cotidianas y fue asumida con cierta naturalidad. La “comunidad” es una entidad de pertenencia y organización reconocida y valorada como distintiva de la cultural local y asociada a los valores de “unión”, “igualdad”, “cooperación” y “autonomía”. De ahí que se interprete que los móviles económicos a los que aludían muchos entrevistados para justificar su involucramiento en los grupos también estuvieran imbricados con compromisos afectivos y morales que mantenían con sus pares comunitarios, aunque su explicitación fuera menos frecuente.

La “comunidad”, en cuanto entidad organizativa y representativa, también se vio reforzada, actualizada y legitimada por la nueva legislación sobre la cuestión indígena. La Constitución Nacional de 1994 concedió estatus jurídico y reconoció a las “comunidades indígenas” como forma tradicional de organización y representación de las parcialidades de los pueblos originarios. También les otorgó el derecho a la titulación de los territorios que habitan sus miembros. La convergencia de los factores hasta aquí expuestos, favoreció que el grupo comunitario, sea como grupo de beneficiarios o “comunidad indígena”, emergiera como una estructura organizativa y como actor colectivo de creciente visibilidad y legitimidad en el territorio⁷.

⁷ Entre 1995 y 2000 aproximadamente 60 grupos comunitarios obtuvieron la personería jurídica de comunidad indígena en el territorio de estudio (Moritán y Cruz, 2011:21).



Si bien no hubo grandes tensiones entre los nuevos formatos organizativos impulsados y los preexistentes, el asociacionismo conforme lo entendían los agentes de desarrollo no siempre resultó una tarea fácil. Restar tiempo al trabajo productivo para asistir a reuniones, asociarse con vecinos con quienes no se mantenían relaciones fraternas o, incluso, perder cierta autonomía en la toma de decisiones sobre la economía familiar no alentaban la participación en los grupos patrocinados por las ONGs. Las diferencias y disputas entre vecinos y/o parientes, originadas en otras dimensiones de la vida (política, religiosa o comunitaria) también intervenían en la dinámica de los grupos fisionándolos y/o alejando a parte de los integrantes. Si las redes de vinculación preexistentes fueron plataformas sobre las que emergió y proyectó el nuevo formato asociativo propuesto, las tensiones y divisiones cotidianas de los pobladores también modelaron y establecieron límites al alcance de la asociación.

El surgimiento de ONGs en el territorio abrió un nuevo canal de circulación de información y recursos entre la institucionalidad pública, monopolizada hasta entonces por las autoridades políticas locales, y los pobladores rurales. Los técnicos operaron como *mediadores sociales* (Neves, 1997) al intermediar en la vinculación de personas de esferas sociales diferenciadas y difundir nuevas representaciones sobre la realidad social.

1.2 El Movimiento Territorial: la construcción de un sujeto político

A finales de la década de 1990, los miembros de las instituciones de apoyo se percataron que, con insuficiencia de recursos, enfrentaban problemáticas comunes. A partir de encuentros en los que compartían su labor y diagnósticos, cimentaron un nuevo espacio: el Movimiento Territorial (MT), pensado en sus inicios como una red de articulación de instituciones de apoyo.

Si bien el diagnóstico sobre la crisis social fue un principio de entendimiento, las estrategias de intervención, principalmente en lo que concierne al vínculo con los beneficiarios, generaron desencuentros. Los miembros de MINK'A, Tierra y parte del equipo técnico de la PD abogaban por integrar a los campesinos al nuevo espacio y tornarlos partícipes en la toma de decisiones y en la gestión financiera. Quienes conducían la ONG eclesial interpretaron la propuesta como un avance sobre su autonomía institucional, especialmente a partir de la injerencia en su economía, varias veces superior a la de las otras instituciones. Los dirigentes de la PD optaron por replegarse del



Movimiento Territorial y continuar su labor a través del formato de trabajo con grupos de beneficiarios.

Superada la disputa por el formato organizativo, en el corto plazo hubo una masiva incorporación de grupos comunitarios, de artesanos y organizaciones de productores al Movimiento Territorial. De ser una red de instituciones de apoyo se reconfiguró en una organización territorial de segundo grado de base campesino-indígena, con un equipo técnico integrado por MINK'A y profesionales independientes. En 2002, se estimaba que el espacio nucleaba a 40 organizaciones que agrupaban a 1300 familias.

En la perspectiva de los técnicos de MINK'A, dadas las condiciones históricas de subordinación económica, política, social y étnica de los campesinos, sólo se generarían condiciones para un mejoramiento sostenido de sus vidas, si conseguían constituirse en un sujeto político colectivo con capacidad de acción y alianza con otros sectores sociales. En términos programáticos y de contenido, esa idea de "cambio social" poseía un grado de abstracción e indefinición, pues se apostaba a definirla gradual y colectivamente.

El ámbito social de los pobladores rurales y el estatal se convertían en arenas donde promover transformaciones. Con relación al primero, convocaban a los campesinos a reflexionar sobre las inequidades contenidas en sus relaciones (de clase, de género, generacionales e interétnicas). Proponían producir vínculos fundados en prácticas democráticas de "participación" y "representación" y en la simetría y reciprocidad. La arena estatal se constituía en un espacio donde disputar la definición del rol del Estado y de políticas públicas. Desplegar este tipo de prácticas políticas no suponía involucrarse en estructuras partidarias. Dadas las correlaciones de fuerzas y lógicas existentes en éstas, los técnicos eran escépticos sobre la factibilidad de que los campesinos pudiesen imponer lógicas alternativas. El Movimiento Territorial debía constituirse en portavoz de los sujetos subalternos del territorio para interpelar a los representantes políticos con una agenda y propuestas que contemplaran sus problemáticas. En lo inmediato debían implementar proyectos de desarrollo para garantizar la subsistencia de sus miembros.

En torno a la identidad "campesino-indígena" proyectaron el reconocimiento y movilización de los pobladores del territorio. La opción por un principio de agregación clasista se fundaba en su



interpretación del funcionamiento de la sociedad y en la capacidad de abarcar diferentes facciones de clase. Contemplaban la referencia indígena, pero tenían algunos reparos por su potencialidad de fragmentación, dada la existencia de diferentes grupos étnicos, así como de “gringos” (de origen occidental) en el territorio y en la provincia, entre quienes ellos mismos se encontraban.

El Movimiento Territorial supuso un formato organizativo novedoso en el territorio ante el cual los actores locales produjeron representaciones heterogéneas, que ayudan a entender las diferentes lógicas de vinculación e involucramiento para con éste y su devenir⁸. Una parte considerable de los campesinos lo percibió como un actor externo que “ayudaba” por medio de proyectos, imagen que emulaba a las ONGs de apoyo, o como un agente económico que “compraba” sus productos a un precio más favorable, imagen que emergía de los proyectos de comercialización asociativa.

La novedad y el grado de abstracción de la idea de una organización territorial de segundo grado, integrada por personas de comunidades distantes que en pocas ocasiones se conocían y/o interaccionaban, así como lo abstracto del “proyecto político de cambio social” parece que no favorecieron la inteligibilidad de la propuesta de los técnicos. Esta interpretación surge de contemplar la interacción de al menos dos lógicas cognitivas que entraron en tensión. Rolando Pinto Contreras, observa que la forma de conocer de los campesinos es fundamentalmente experiencial y arraigada a su contexto situacional. En contraposición, la de los técnicos se construye como abstracción general, con vistas a ser instrumentalizada por otros actores y en otros ámbitos (1991). La propuesta de un formato organizativo innovador y de un proyecto de “cambio social”, al no formar parte de la experiencia de gran parte de los pobladores rurales, no favoreció su comprensión en los términos agenciados por los técnicos y, en consecuencia, no ocurrió la adhesión masiva en los términos pretendidos. Las representaciones de actor externo que “ayuda” o “compra” emergían de las prácticas concretas que experimentaban los campesinos. Más que involucrarse con el “proyecto político”, la mayor parte tendió a hacerlo con los proyectos ejecutados en el marco del Movimiento.

Algunos campesinos y una veintena de líderes comunitarios y dirigentes evidenciaban interpretar y apropiarse de la propuesta de los técnicos. La mayor parte había participado en el pasado en grupos

⁸No se registraron antecedentes de organizaciones agrarias y/o gremiales de segundo grado en el ámbito rural del territorio.



religiosos y/o políticos, donde adquirieron capacidades para gestionar instancias participativas. Otra característica común era la experiencia de haber emigrado a ámbitos urbanos, donde descubrieron y se abrieron a “otras formas de hacer las cosas”. Así, el proyecto político del MT era fundamentalmente patrimonio de técnicos y de algunos dirigentes quienes intentaban proyectarlo a sus “bases” a través de proyectos socio-económicos, capacitaciones, formación política y de sus compromisos afectivos.

En el otro extremo, dirigentes locales involucrados con estructuras partidarias o indigenistas comprendían la propuesta de los técnicos, pero no la compartían. Apostaban a consolidar las organizaciones en las que participaban. Veían en el MT una amenaza, pues competía por la adhesión de los pobladores rurales y por el control y distribución de los recursos de la institucionalidad pública.

La capacitación y formación política de campesinos promovida en el Movimiento Territorial potenció la formación de nuevos dirigentes locales que gradualmente asumieron parcialmente funciones de *mediadores sociales*. Algunos de ellos, especialmente aquellos cuyas trayectorias estaban menos vinculadas a la labor de las ONGs, como ser los de TIERRA, experimentaron cierta prescindencia del asesoramiento técnico, especialmente en la toma de decisiones sobre sus estrategias productivas y comerciales y en sus alineamientos políticos. Dada la doble condición de los técnicos de foráneos y no campesinos, fueron interpelados por conducir el MT. Entendían que debían limitarse a asistir en aquellas labores administrativas y burocráticas, que los dirigentes campesinos encontraban dificultad para desempeñar por su escaso dominio de la escritura, del lenguaje y de la lógica de la institucionalidad pública. La toma de decisiones quedaba reservada para los dirigentes. Algunos técnicos interpretaron que era el momento de ceder espacio, en tanto otros sostenían que aún no estaban dadas las condiciones por la persistencia de prácticas “autoritarias” y “personalistas” entre algunos dirigentes y la posibilidad de “cooptación” por dirigentes políticos. La tensión, lejos de resolverse en el marco de un conflicto, emergió periódicamente redefiniéndose las posiciones entre las partes. Conforme los técnicos se replegaron de las instancias decisorias y disminuyó su participación en el MT, las disputas y negociaciones continuaron reeditándose, pero entre dirigentes.



1.3 Hibridación de prácticas en la reconfiguración de la arena política

Otra de las tensiones entre técnicos y campesinos se expresó en torno a las formas de concebir y vincularse con la política. Comprender la dinámica que ésta adquiere supone evitar restringir el análisis a la dimensión político-ideológica, para analizar su imbricación con otros dominios sociales y las lógicas que derivan de las *relaciones múltiples*, a través de las cuales las personas se vinculan, reconocen y comprometen (Palmeira y Heredia, 2010). Sin embargo, cuando los técnicos cuestionan las prácticas de los dirigentes políticos locales por “autoritarias” o “clientelares”, rara vez se percatan que pueden estar hablando de parientes, compadres y/o vecinos de los destinatarios de sus proyectos y de lógicas de “ayuda” y lealtad que tienen un sentido específico para éstos.

Las lecturas y propuestas de acción de los técnicos sobre la arena política suelen regirse por el proyecto de transformación social que apuestan canalizar a través del Movimiento Territorial. Esperan que los pobladores locales “politicen” – desnaturalicen, objetiven y racionalicen- sus prácticas y relaciones sociales, es decir, dimensiones de su cotidianeidad impregnadas de principios morales y afectos. Pero para los campesinos las lealtades contenidas en esos vínculos suelen ser más fuertes y se anteponen a las producidas entre miembros del MT. Dadas sus diferentes filiaciones políticas, durante la campaña electoral se instaura una veda, donde evitan hablar de política. Exhortan a “respetar” - no cuestionar- los alineamientos partidarios de cada uno para preservar la unidad, un límite (im)puesto a la (intro)misión política de los técnicos.

Lo anterior no supone que no se hayan registrado cambios en la escena política local. Se observó que la difusión de prácticas y lógicas organizativas patrocinadas por los técnicos fue dispar y ambigua en las diferentes localidades que componen el territorio. La legitimidad que adquirieron el lenguaje y las prácticas asociadas al desarrollo entre los pobladores locales, predispuso a dirigentes políticos a actualizar sus discursos y, en menor medida, sus lógicas de acción.

La formación e información adquirida por los campesinos contribuyó a redefinir los términos del vínculo con los dirigentes políticos, especialmente en las campañas electorales. Las nuevas organizaciones y las revigorizadas, especialmente las “comunidades indígenas”, fueron incluidas en las visitas proselitistas. Ante coyunturas específicas, grupos comunitarios asumieron un



comportamiento corporativo en el reclamo y/o negociación ante los funcionarios locales. Pero no es una práctica generalizable, pues los lazos políticos se imbrican con los vecinales fragmentándose estos últimos en la mayoría de los casos. Las redes políticas también permearon al Movimiento Territorial. En reiteradas situaciones dirigentes campesinos con gran reconocimiento y proyección regional, de forma unilateral, se volcaron a la arena política encuadrándose como candidatos de alguna de las estructuras políticas partidarias y abandonando las filas del MT.

La cuestión étnica es otra expresión de las prácticas políticas donde emergieron tensiones entre las lógicas nativas y foráneas. Ante la dilación de las gestiones del gobierno provincial en la entrega de las personerías jurídicas y de los títulos de las tierras a las comunidades indígenas, los miembros de las comunidades y organizaciones indígenas se articularon en red para coordinar acciones judiciales y de protesta pública. Al inicio, la información y la asistencia legal a miembros de las comunidades como la articulación de acciones fue asumida por dirigentes indígenas y técnicos de MINK'A y PD.

En el contexto de revalorización y reafirmación étnica que opera en el territorio, algunos dirigentes indígenas cuestionaron la participación de los agentes foráneos. Entre otras cuestiones, objetaron su protagonismo y que oficien como portavoces de los pobladores, los formatos organizativos y las alternativas de desarrollo que promueven. Entre los dirigentes indígenas se difundió un discurso que consagra a la "comunidad indígena" como el formato organizativo tradicional y legítimo del territorio. Valorán la organización y toma de decisiones en asamblea comunitaria, por lo que consideran que la "comunidad" no debe subordinarse a estructuras organizativas de segundo grado, como ser el Movimiento Territorial. De ahí que el formato de red resulte elegido para articular acciones a mayor escala.

Sin embargo, existen divergencias en las lógicas de vinculación con las instituciones estatales. Algunos dirigentes indígenas acotan sus prácticas organizativas a las comunidades y rehúsan participar de estructuras estatales. Otros patrocinan un partido político de orientación indígena que debutó en las elecciones del 2013 y a través del cual accedieron a conducir algunas alcaldías y a cargos en el ejecutivo provincial. Finalmente, otros participan los partidos políticos tradicionales.

En 2011, los miembros de una ONG indigenista provincial, con apoyo de instituciones extranjeras y nacionales, crearon una Tecnicatura Superior en Desarrollo Indígena que tiene por meta formar



técnicos indígenas con una cosmovisión andina para que asuman el papel de agentes de desarrollo en el territorio y prescindir de técnicos foráneos.

El fenómeno descrito está en configuración y se desconoce los desdoblamientos que puedan operar, sin embargo interesa observar algunos posicionamientos de dirigentes del Movimiento Territorial. En los últimos años, integrantes de dicho espacio participaron de acciones coordinadas con dirigentes indígenas en el marco de la lucha por la tierra. Si bien al inicio asistían como miembros del MT, comenzaron a participar como integrantes de sus grupos comunitarios. Si se considera que en torno a la cuestión étnica se traban actualmente las principales luchas políticas en el territorio, se observa que la identidad indígena y la lucha por la tierra han resultado más tangibles y efectivas para la movilización y construcción de los pobladores locales como sujetos políticos colectivos.

La identidad “campesina” fue escasamente apropiada por los pobladores rurales. El Movimiento Territorial, que en sus inicios fue proyectado como una estructura de representación y reivindicación de los intereses de los pobladores rurales, conducido ahora por dirigentes locales, parece estar replegándose a su dimensión económica.

Actualmente, se observa en la narrativa de técnicos foráneos y en la de los dirigentes indígenas diferentes representaciones sobre formatos organizativos, alternativas de solución o “desarrollo” y categorías identitarias en torno de las cuales movilizar a los pobladores rurales para transformar sus condiciones de existencia. Lejos de pretender caracterizar una escena en donde las prácticas políticas permanecen o se transforman de un tipo puro a otro, se observa una hibridización de visiones y lógicas a partir de la forma en que los sujetos se apropian y (re)significan las representaciones y prácticas de otros actores, aunque no siempre sea reconocida en sus narrativas.

2. Formatos organizativos en disputa en el centro-este formoseño

La trama organizativa analizada en esta sección se despliega en el centro y este de la provincia de Formosa. Los registros empíricos fueron producidos entre 2004 y 2014, en el marco de estudios que



analizaron prácticas organizativas, políticas e interacciones entre representantes de la institucionalidad pública y pobladores rurales.

2.1 Desarticulación de las economías campesinas, agentes de desarrollo y producción de estructuras organizativas

Con cierta semejanza a lo descrito para el caso jujeño, la vida social en el territorio se organiza fundamentalmente a través de redes sociales parcialmente superpuestas, por medio de las cuales las personas se vinculan. En los “pueblos” se concentra el mayor número de habitantes y de instituciones públicas y religiosas y en sus alrededores se ubican asentamientos de población dispersa conocidos como “colonias” o “parajes”. Los residentes de los pueblos y de las colonias suelen vincularse a través de las diferentes redes sociales que articulan esa geografía.

Durante la primera mitad del siglo XX, las familias rurales combinaron ingresos provenientes de la producción agropecuaria (algunera, forestal, ganadera, etc.), del trabajo agrario transitorio, del empleo público y/o de la producción de animales de granja y horticultura. Una parte significativa de la población rural es de origen paraguayo, migrantes que se asentaron en pequeñas parcelas en situación precaria de tenencia, atraídos por la demanda de mano de obra en los grandes establecimientos ganaderos y forestales y por las posibilidades que antiguamente generaba el cultivo del algodón.

Desde fines de la década de 1950, el resquebrajamiento de las políticas de fortalecimiento del mercado interno y de fomento de la producción industrial de las economías regionales dio inicio a crisis recurrentes y a una paulatina descomposición de la pequeña producción algodonera. La gradual liberalización del mercado y la difusión de tecnologías para el desarrollo de economías de escala tornaron inviables las unidades de producción inferiores a diez hectáreas.

A fines de la década de 1960, los campesinos del Noreste Argentino, con apoyo de grupos religiosos, iniciaron un ciclo de protesta y organización gremial conocido como las “Ligas Agrarias” (Rozé, 1992). La conformación de la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas (ULiCaF) fue su expresión en la provincia de estudio y se desarticuló con la represión desatada por la dictadura cívico-militar iniciada en 1976. Reinstalado el sistema electoral de gobierno a fines de la década de 1980, dirigentes de las ex ligas retomaron el proceso de organización gremial de los pobladores



rurales y crearon el Movimiento Agrario Formoseño (MAF). Al igual que en la ULiCaF, los dirigentes del MAF proyectaron la estructura organizativa a la geografía provincial para constituirse en portavoces de los sujetos rurales subalternos formoseños.

Durante los años '80 y principios de los '90 hubo varias iniciativas de creación y/o formalización de organizaciones de pobladores rurales formoseños. En el territorio comprendido por las localidades de General Belgrano y Misión Tacaaglé, un grupo de religiosos entre los que destacaba un párroco de origen italiano, autoreferenciado y comprometido con la forma de “vida campesina”, promovió acciones de producción y comercialización colectivas y cooperativas de trabajo. Entendían que el asociativismo era la forma de sortear a los intermediarios y comercializar con mayor poder de negociación los productos frutihortícolas de los pobladores rurales, que emergían como una fuente de ingresos complementaria ante la caída del precio del algodón. En el marco de sus actividades parroquiales se vincularon con un joven con inquietudes sociales decidido a “pasar a la acción”. En él delegaron la gestión de proyectos de desarrollo financiados por la Fundación Kolping y ejecutados a través de grupos de familias, denominados “grupos Kolping”.

El sacerdote también operó como portavoz de los pobladores rurales por medio de presentar ante las autoridades públicas peticiones y listados de familias que reclamaban tierra y la regularización de sus posesiones, entre otras demandas. Gradualmente se constituyó en un referente local, portador de una visión alternativa de lo que era la situación en el territorio y de las posibilidades de cambio. El papel asumido lo enfrentaba recurrentemente a otros mediadores sociales que operaban en el territorio, como ser autoridades gubernamentales, intermediarios comerciales, agentes estatales de desarrollo e, incluso, la propia jerarquía eclesial.

Las agencias privadas y estatales de desarrollo fueron otras instituciones desde donde se intervino en la producción de nuevos formatos organizativos. Entre las primeras, destacan los miembros del Instituto de Cultura Popular (INCUPO), ONG de filiación católica que por medio de la ejecución de proyectos locales promueve la formación de grupos de beneficiarios orientados a consolidar la producción agropecuaria y a canalizar reivindicaciones gremiales.

Entre las agencias estatales nacionales destacó el Programa Social Agropecuario (PSA). A partir de 1993, a través de este instrumento se desplegó una cartera de proyectos productivos con fines



comerciales, para el autoconsumo e infraestructura comunitaria, implementados por medio de una red de grupos de beneficiarios extendidos por el territorio provincial.

Como efecto de las acciones de intervención referenciadas y de las lógicas de los pobladores locales, comenzó a conformarse una nueva estructura organizativa denominada Organización Campesina Belgrano-Tacaaglé (OCBT), de proyección territorial con epicentro en las localidades de General Belgrano y Misión Tacaaglé. En su consolidación fue fundamental el apoyo recibido de los representantes locales de la Iglesia Católica, de la Fundación Kolping, de INCUPO y del PSA. Entre 1994 y 1995 se realizaron las primeras reuniones en cada colonia aprovechando los servicios religiosos. Las redes de vecindad, las religiosas y las tramas articuladas por la agencias de intervención fueron estructuras donde se proyectó el nuevo espacio organizativo. Luego se iniciaron encuentros específicos en los que se eligieron delegados por colonia. El asesoramiento brindado por los agentes de desarrollo favoreció la emergencia de nuevos dirigentes campesinos que junto a los técnicos y religiosos pasaron a “conducir” la conformación de la nueva organización. Desde los inicios participaron del MAF y adhirieron al proyecto de construirlo a imagen de la ULiCaF. Retomaron la identificación como “campesinos” para movilizar y reivindicar demandas de sus “bases”.

Conforme operaba la actualización de la cuestión indígena en el escenario nacional, en el provincial también se verificó la creciente visibilización de grupos étnicos y la formalización de las comunidades indígenas. A diferencia de lo observado en el caso jujeño, en Formosa quienes asumieron identidades indígenas se articularon en estructuras organizativas diferenciadas de quienes lo hicieron a través de la “campesina”, siendo limitada su participación en la trama organizativa analizada en este caso.

2.2 Disputas en torno a una trama organizacional emergente

Los agentes de desarrollo compartían la idea de que las problemáticas de los campesinos sólo eran factibles de ser resueltas a partir de la articulación en organizaciones formalizadas. Sin embargo, la idea de “promover la organización” albergaba una polisemia de sentidos que derivó en disputas que intervinieron en el devenir de la trama organizativa. Dada la heterogeneidad de actores



intervinientes, la OCBT y el MAF configuraron arenas donde se expresaron disputas sobre las prácticas y perfiles organizativos a promover.

Entre los religiosos, técnicos y dirigentes campesinos que apostaban a la construcción de la OCBT existía un principio de acuerdo en que la organización debía expresar y canalizar la resistencia a la política económica y a los poderes establecidos y constituirse en una herramienta de lucha política y transformación social. Si bien “resistencia”, “lucha” y “transformación” eran categorías enunciadas por estos actores para agenciar el objeto de sus acciones, los sentidos y prácticas a las cuales aludían resultaban diversas y eran motivo de tensiones.

Los religiosos impulsaban un proceso organizativo definido como “participativo” y “horizontal”, que privilegiaba la “unidad” de los campesinos para la expresión pública de sus demandas. Por medio de esa estructura organizativa procuraban garantizar el acceso colectivo a recursos de la institucionalidad pública de desarrollo.

Entre los técnicos existían quienes priorizaban el “trabajo socio-organizativo” (o político) y otros que otorgaban primacía a la producción agropecuaria. En la perspectiva de algunos miembros del PSA, los técnicos de las ONGs, al privilegiar las reivindicaciones gremiales, descuidaban la cuestión productiva y, en consecuencia, la propia subsistencia de los pobladores rurales. Quienes se sentían interpelados, argumentaban que esa perspectiva centrada en lo productivo carecía de un enfoque integral y no garantizaba la reproducción social del campesinado en el largo plazo.

Algunos dirigentes campesinos comenzaron a cuestionar el formato “grupo de beneficiarios” a través del cual los agentes de desarrollo canalizaban sus acciones en las colonias. Entendían que esa lógica organizativa era funcional a la ejecución de proyectos pero no a la transformación de su realidad social. No solo era ineficaz para abordar integralmente sus problemáticas, sino que al articular en grupos “aislados” a los pobladores, contribuían a “dividir” las organizaciones. Aspiraban a implementar proyectos que abordaran integralmente tanto a las problemáticas rurales como al conjunto de sus miembros. Pretendían constituir una organización político-gremial que representara los intereses de los pobladores rurales y articulara con otras organizaciones sindicales y sectoriales, provinciales y nacionales. Por último, manifestaban cierto resquemor por el papel de los asesores



externos en la organización campesina, fundamentalmente en la toma de decisiones y en la representación.

Otros dirigentes, y fundamentalmente las “bases” de la OCBT, se mostraban más indulgentes con el accionar de los agentes de desarrollo, entendiendo que podían integrar los recursos y servicios que ofrecían a sus objetivos institucionales y/o individuales.

Con frecuencia, las diferentes concepciones sobre los perfiles organizativos se expresaban a través de cuestionamientos y descalificaciones de las prácticas de quienes eran percibidos como agonistas. En la perspectiva de los religiosos y algunos técnicos, los dirigentes campesinos tenían tendencia a producir prácticas “personalistas” y “autoritarias” que contribuían a construir organizaciones “clientelares” y “dependientes” de sus liderazgos. Por su parte, los dirigentes rechazaban tales acusaciones y replicaban evidenciando las contradicciones a las que estaban sujetos los técnicos como efecto de su vinculación (y/o lealtad) a dos marcos institucionales. Sostenían que eso se expresaba en posicionamientos ambiguos y en la (re)producción de vínculos “clientelares” con los campesinos dado el marco de sus relaciones laborales⁹.

En el MAF las disputas por los perfiles organizativos adquirieron derivaciones específicas dado su perfil sectorial y provincial. Emergieron tensiones en torno al sentido de la organización, polarizándose las posiciones en dos sectores. La facción que integraron los dirigentes de la OCBT sostenía un perfil gremial, autónomo del Estado y de los partidos políticos, orientado a construir un movimiento social multisectorial con proyección nacional, junto a otras organizaciones gremiales urbanas y rurales. El otro sector planteaba que la organización debía constituirse en un “grupo de presión” de los pequeños productores, articulado a la institucionalidad estatal y al partido político gobernante. Los vínculos con dirigentes del Partido Justicialista provincial eran determinantes en la configuración de esta controversia, pues quienes defendían la segunda posición eran referentes locales de esa estructura partidaria, mientras los otros asumían posiciones políticas heterogéneas, pero opositoras al oficialismo provincial.

⁹En aquella época los técnicos del PSA tenían un vínculo laboral precario, a través de contratos temporales cuyos honorarios se definían por el número de grupos asistidos. El financiamiento internacional y nacional que recibían las ONGs también dependía del número y de la continuidad de los proyectos ejecutados.



De lo expuesto, se observa que el principio de entendimiento de los diferentes actores sobre la necesidad de “promover organizaciones” al ser puesto en práctica se desdoblaba en diferentes planteamientos antagónicos (formatos grupales vs organizaciones más amplias; productivo vs gremial; rural/sectorial vs multisectorial; oficialista vs. opositor y proyección local, provincial o nacional), que configuraban diferentes perfiles organizacionales.

2.3 Reconfiguración de la trama organizativa

A partir de mediados de la década de 1990, las disputas sobre los perfiles organizativos se expresaron al interior de las organizaciones campesinas y de las instituciones públicas que ejecutaban programas sociales, redefiniendo sus configuraciones, prácticas políticas y trayectorias. El hecho de que las referidas disputas se desplegaran en estructuras estatales y no estatales se explica por la circulación y/o participación simultánea de personas en diferentes estructuras organizativas.

El MAF fue una arena privilegiada en la que se expresó la disputa por los modelos organizativos. La brecha entre las visiones de los dirigentes campesinos con relación al vínculo con los líderes del partido gobernante se vio intensificada con el lanzamiento, en 1996, del Programa de Asistencia Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA). El PAIPPA fue la primera iniciativa de desarrollo rural desplegada por el Gobierno provincial. Se ejecutó a través de referentes locales o “idóneos”, que relevaban las necesidades y demandas de los pobladores rurales y las comunicaban a los directivos del Programa para que las canalicen a las dependencias provinciales correspondientes. Es decir, implementó una modalidad de intervención a través de redes interpersonales, alternativa a los “grupos de beneficiarios”. Para ello se recurrió a la estructura organizativa del MAF. Sus dirigentes e integrantes desempeñaron el papel de intermediarios entre la población rural y los directivos del PAIPPA. En torno al Programa se generó la categoría “paipper” para referir a los beneficiarios o autoreferenciarse como uno.

La iniciativa gubernamental respondió al creciente clima de conflicto social en las áreas rurales de la Provincia. El sector de dirigentes del MAF partidario de no involucrarse en estructuras políticas-partidarias, en el que se encontraban los dirigentes de la OCBT, cuestionó la imbricación de ambas estructuras organizativas y al propio Programa, por considerar el tipo de vínculo que se había constituido como un acto de “cooptación”. Al año de creado el PAIPPA, representantes de dicho



sector ganaron las elecciones en la que se definió la conducción del MAF. El triunfo, lejos de concitar la adhesión de ambas facciones, profundizó el antagonismo. Los dirigentes derrotados impugnaron y destituyeron al nuevo presidente mediante una asamblea “paralela” y, luego, “expulsaron” a los referentes que lo habían apoyado. Éstos denunciaron una “maniobra” de las autoridades del Gobierno provincial para “cooptar” al MAF y neutralizarlo políticamente “dividiendo” a las organizaciones del sector.

Ante la desvinculación del MAF dos interrogantes se instalaron entre dirigentes campesinos y asesores de la OCBT: qué tipo de organización construir y cómo vincularse con los programas e instituciones de desarrollo, pues acceder a los recursos que distribuían se imponía como necesidad ante la crisis económica que atravesaban los pobladores rurales. Las posturas se polarizaron entre el modelo sectorial, acotado a lo rural y a lo local, patrocinado fundamentalmente por los religiosos, y el proyecto del movimiento multisectorial con proyección nacional, impulsado por la nueva generación de dirigentes campesinos. Al prevalecer la segunda posición, en febrero de 1999, junto a otras organizaciones rurales de la Provincia, se creó una nueva organización: el Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR). El MOCAFOR fue concebido como una organización sectorial con proyección provincial y alternativa al MAF. Los religiosos, ante la falta de apoyo a su propuesta, se replegaron de la nueva estructura organizativa y continuaron con la ejecución de proyectos en las colonias a través de grupos de productores.

No solo las organizaciones sociales fueron afectadas por las prácticas estatales, sino también las instituciones públicas se configuraron en arenas donde sus técnicos, los de ONGs y dirigentes campesinos disputaron modalidades de intervención y formatos organizativos a patrocinar. El PSA fue un caso emblemático.

En sus inicios, la ejecución del PSA la realizaban técnicos contratados por el Programa o equipos técnicos de ONGs y de organizaciones de productores a través de los que se “tercerizaba” o delegaba dicha ejecución. En su papel de ejecutores territoriales del PSA, los dirigentes del MOCAFOR vivenciaron la contradicción que suponía la promoción del formato “grupo de beneficiarios” auspiciado por el Programa, cuando lo que pretendían construir era una organización territorial. También se enfrentaban al dilema de distribuir los escasos fondos que ofrecía el Programa entre sus



“bases”, debiendo seleccionar a cuáles familias beneficiar. Ante la disconformidad con la operatoria del PSA, dirigentes del MOCAFOR junto a algunos técnicos del Programa y de ONGs formularon y elevaron a la coordinación provincial del PSA proyectos con una estrategia de intervención que garantizaba mayor cobertura de población. Los proyectos fueron avalados técnicamente, pero finalmente no recibieron financiamiento, lo que deterioró aún más las relaciones entre las partes.

Ante el recrudecimiento de críticas y enfrentamientos entre los dirigentes campesinos y el coordinador provincial, éste decidió centralizar la ejecución de los proyectos en su equipo técnico, argumentando que las organizaciones de base reproducían prácticas “clientelares” y que las ONGs priorizaban la organización gremial en desmedro del fortalecimiento productivo predial, como primera instancia de transformación social. La nueva estrategia de intervención se limitó a asistir grupos de productores. Adicionalmente, se impulsó la promoción de nuevas asociaciones locales de productores con fines productivos y comerciales, sorteando la trama organizativa del MOCAFOR.

La trama organizativa analizada posibilita observar cómo en torno a la idea de “promover la organización” emergió una disputa sobre los perfiles y prácticas organizativas, que permeó estructuras estatales y no estatales. Las definiciones en juego rara vez se proyectaban homogéneamente hacia las “bases” de las organizaciones y/o “beneficiarios” de los programas. Éstos, lejos de limitar su filiación a una estructura organizativa, conforme los exhortos de los referentes, participaban con frecuencia de diferentes redes de distribución de recursos, evidenciando cierta autonomía en la (re)producción de sus vínculos.

3. Regularidades y particularidades de las tramas jujeña y formoseña

El caso jujeño y el formoseño presentan regularidades y particularidades interesantes de ser verificadas en otras experiencias de intervención con vistas a objetivar rasgos distintivos de los procesos organizativos en el desarrollo rural.

En un contexto de precarización de las condiciones de vida campesinas irrumpieron agentes de desarrollo vinculados a instituciones públicas y privadas para ejecutar proyectos y revertir la situación. La “promoción de la organización” fue un componente común en sus estrategias. En torno a la idea de “organizar” se desdoblaron prácticas, sentidos y formatos organizativos que intervinieron en la reconfiguración de las tramas territoriales existentes.



El “grupo de beneficiarios” o “de productores” fue el formato a través del cual iniciaron sus intervenciones en las aldeas (“comunidades” o “colonias”). Estos modos de articulación, lejos de producirse sobre terrenos ‘desérticos’ en términos organizativos, se proyectaron sobre redes sociales preexistentes. Con la figura de proyecto, más que “organizar a los pobladores rurales”, los agentes de desarrollo formalizaron y fortalecieron segmentos de las tramas organizativas que con anterioridad articulaban a los campesinos en su cotidianeidad. El hecho de que este formato se proyectara sobre redes vinculares y de cooperación preexistentes explica que no haya sido vivenciado como una lógica foránea por los pobladores rurales y, por lo tanto, resistida. Los conflictos que pudieron emerger en el marco de los proyectos no se diferenciaron de las disputas habituales entre vecinos y parientes. Otro factor que predispuso y subordinó a los campesinos a adherir a este formato organizativo fue la necesidad de acceder a financiamiento para sobrevivir.

En las instancias organizativas de segundo grado, es decir de escala mayor a la aldea, es donde se verificó la producción de nuevas estructuras y de disputas por los perfiles organizativos.

Algunos referentes, entre los que destacan miembros de PD en el caso jujeño y del PSA y religiosos en el formoseño, centraron su accionar en proyectos asociativos con fines económicos, impulsando organizaciones formalizadas de productores (cooperativas, asociaciones, etc.) o redes de grupos de beneficiarios asesoradas y/o coordinadas por las instituciones de desarrollo. Otros, entre los que destacan miembros de MINK’A, del MAF, de la OCBT-MOCAFOR, de INCUPO y algunos técnicos del PSA, apostaron a construir una organización político-gremial de proyección provincial que se constituyera en portavoz de los sujetos rurales subalternos. Las identidades promocionadas para movilizar la adhesión de los pobladores rurales difirieron en cada caso. En el primero, se tendió a accionar identidades asociadas a las instituciones y/o programas de apoyo (“grupos kolping”, “paipperos” etc.) o simplemente “pequeños productores”. En el segundo caso, se movilizaron identidades genéricas que conllevan la condición de marginación: “campesinos” e “indígenas”. La relación entre cada perfil asociativo y las identidades asociadas evidencia la funcionalidad que los sujetos, consciente o inconscientemente, agencian a las estructuras organizativas, desde constituirse en plataformas para implementar proyectos de las instituciones de apoyo a construir un sujeto político para la transformación social.



En la construcción y trayectorias de las organizaciones gremiales es donde mejor se expresan las especificidades de cada caso. En la trama formoseña, el antecedente de la ULiCaF operó como una referencia para los dirigentes campesinos que los predispuso a recuperar la visibilidad y protagonismo político que tuvieron como sector social en el pasado. Ese registro histórico parece haber favorecido que la propuesta sea tangible para las “bases” y que la identidad “campesina” fuera (re)apropiable.

En el caso jujeño destaca la inexistencia de un antecedente organizativo de proyección regional y la falta de identificación de los pobladores rurales con lo “campesino”, una de las referencias identitarias propuestas por los agentes de desarrollo. No obstante ello, el proceso organizativo que impulsaron se desplegó a escalas inéditas en el territorio, aunque más como práctica económica que como política. Conforme se actualizó y agravó el reclamo de los títulos de las tierras por miembros de las comunidades indígenas, fue creciente la adhesión de los pobladores rurales a las estructuras organizativas, a las identidades étnicas y a las instancias de lucha y protestas convocadas por los nuevos dirigentes indígenas. La movilización política sobre un reclamo e identidades históricas parece haber sido más tangible y efectiva en la convocatoria. A través de las prácticas organizativas y símbolos que consideran tradicionales de su cultura, los pobladores rurales del territorio recobraron visibilidad y protagonismo redefiniendo el escenario político provincial, ciertamente en otros términos a los proyectados inicialmente por los técnicos.

En ambos casos emergieron tensiones en torno a la modalidad de vinculación con las estructuras político-partidarias, estando estrechamente asociadas las posturas de los referentes no solo a sus estrategias de reproducción social, sino también a sus filiaciones políticas y redes vinculares. Esto deriva del hecho de que las estructuras organizativas y las redes sociales, lejos de operar como entidades separadas, se imbrican y permean fortaleciendo los lazos o produciendo clivajes según las circunstancias y lealtades que se pongan en juego. La fisión entre el MAF y el MOCAFOR, la deserción de dirigentes del Movimiento Territorial para candidatearse a través de partidos políticos o las diferentes estrategias seguidas por los dirigentes indígenas jujeños son expresiones de ese fenómeno. Paradójicamente, luego de décadas de reclamos para ser reconocidos como sujetos de derechos de las políticas públicas de promoción social, los sujetos rurales subalternos vivencian el



dilema de acceder a los beneficios que emanan de las estatalidades (recursos, cargos públicos, etc.) y el peligro de “cooptación” de sus dirigentes y estructuras organizativas por parte de las lógicas estatales. Esta disyuntiva adquiere renovado sentido ante el imperativo de “organizar” que se instituye en el campo del desarrollo rural. Probablemente la naturalización de ese axioma en parte del ámbito académico explique la poca atención prestada a dicho fenómeno.

La irrupción de agentes de desarrollo supuso nuevos *mediadores sociales* en la escena local que pasaron a vincular a los pobladores rurales con la institucionalidad de desarrollo provincial, nacional e internacional, distribuyendo recursos económicos y nuevas visiones sobre el territorio. Ya sea por el caudal de recursos movilizados o por las visiones de mundo y prácticas que difundieron, su accionar erosionó la centralidad y el poder en esa función que hasta el momento detentaban las autoridades políticas locales y provinciales. Eso supuso un vínculo agonístico entre las partes, que en varias ocasiones fue proyectado sobre las organizaciones campesinas, y una gradual redefinición de las retóricas y prácticas de campaña, conforme las organizaciones campesinas y las acciones de desarrollo rural se difundían y ganaban legitimidad entre la población. Sin embargo, los cambios observados distan de los anhelados por los agentes de desarrollo.

En los casos donde se promocionaron organizaciones político-gremiales, la capacitación y formación política de campesinos impulsó una nueva generación de dirigentes que gradualmente asumieron funciones de mediadores sociales y en la conducción de las organizaciones, hasta el momento dirigidas por los asesores externos. Tanto en el caso del Movimiento Territorial como en la OCBT-MOCAFOR se verifica la emergencia de una disputa en la que los dirigentes campesinos evidencian la posición ambigua de los técnicos en una organización de base y los exhortan a replegarse de la toma de decisiones. En el caso jujeño, la condición occidental, es decir no indígena, de los técnicos redobló su posición de externalidad y su deslegitimación para interpretar e intervenir en procesos de transformación locales. La iniciativa de los dirigentes indígenas de promover centros universitarios de formación de técnicos originarios resulta novedosa y emblemática de las tensiones y trayectorias que pueden seguir los procesos de desarrollo en el continente cuando los actores vivencian y cuestionan la alteridad en los procesos de desarrollo.



Los motivos ideológicos y/o programáticos con los que asesores externos y dirigentes campesinos justificaban sus posturas ante las disputas por las identidades, los formatos y perfiles organizativos, no siempre se correspondían con las prácticas de sus “bases”. La urgencia por acceder a “ayuda” económica, los compromisos derivados de las posiciones ocupadas en sus redes de pertenencia, entre otros aspectos, los predisponían a participar de una, dos o múltiples estructuras organizativas sin necesariamente vivir como contradicción lo que en los discursos de técnicos y dirigentes se planteaba como modelos irreconciliables.

Las prácticas organizativas que proponen los agentes de desarrollo rara vez son asumidas por sus destinatarios sin mediar una resignificación a partir de sus marcos referenciales. El resultado de ese proceso es una hibridación entre prácticas organizativas preexistentes y las patrocinadas por los agentes de desarrollo, lo que explica los desdoblamientos y trayectorias imprevistas de los procesos organizativos. Pero no sólo las tramas organizativas campesinas son alcanzadas por las prácticas de los agentes de desarrollo, éstos y sus instituciones también son afectados y redefinidos por las prácticas de los campesinos.

Los casos analizados verifican la tesis de que no existen poblaciones desorganizadas, sino con otras lógicas y representaciones sobre lo organizativo. El imperativo de “promover la organización”, inherente a toda práctica de intervención en desarrollo rural, parece ser una representación a ser impuesta para legitimar la intervención en poblaciones “pobres” y la difusión de formatos organizativos específicos. Así, pierde su ‘disfraz’ de propuesta técnica, para redefinirse en una posición ideológica sobre la (re)construcción de la realidad social. Son prácticas de vinculación, organización y políticas las que están en disputa en la construcción de orden social.

Referencias bibliográficas

- Bourdieu, P. 2000. La delegación y el fetichismo político. In: Bourdieu. *Cosas Dichas*. Barcelona: GEDISA. pp. 158-172.
- Gluckman, M. 1975. The judicial process among the Barotse of Northern Rhodesia. En: Vilhelm Aubert. *Sociology of Law*. UK: Penguin Education, pp. 161-170.
- Long, N. 2007. *Sociología del Desarrollo: una perspectiva centrada en el actor*. México: El Colegio de San Luis y CIESAS.



- Madrazo, G. 1982. *Hacienda y encomienda en los Andes. La Puna argentina bajo el marquesado de Tojo. Siglos XVIII a XIX*. Buenos Aires: Fondo Editorial.
- Moritán, M. y Cruz, M. 2011. *Comunidades originarias y grupos étnicos de la provincia de Jujuy*. Yerba Buena: Ediciones del Subtrópico.
- Neves, D. 1997. *Assentamento rural: reforma agrária em migalhas*. Brasil: Editora da UFF.
- Palmeira, M. y Heredia, B. 2010. *Política Ambígua*. Rio de Janeiro: DelumeDumara.
- Pinto Contreras, R. 1991. *Extensionista agrícola: ¿educador rural? El carácter educativo de la capacitación tecnológica con productores campesinos*. Santiago de Chile: Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación.
- Rozé, J. 1992. *Conflictos agrarios en la Argentina. El proceso liguista*. Buenos Aires: CEAL.
- Rutledge, I. 1987. *Cambio Agrario e Integración. El desarrollo del Capitalismo en Jujuy (1550-1960)*. Buenos Aires: ECIRA, FFyL, CICSO, UBA-MLAL.